



Pérez Chicué & Abogados

Guadalajara de Buga, Julio 09 de 2015

Señor.

JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - REPARTO
BUGA – VALLE DEL CAUCA.

E.....S.....D

ASUNTO	Acción de Reparación directa- ACCIONADO 1.- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. ACCIONADO 2.- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – FISCALIA GENERAL DE LA NACION -
ACTOR	DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS - C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle,

JULIO CESAR PEREZ CHICUE, abogado en ejercicio identificado con la C.C. 14.887.646 DE Buga y TP 60.880 del CSJ, en nombre y representación del Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, respetuosamente me dirijo al HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVO DEL VALLE destacado ante el circulo judicial de Guadalajara de Buga, para manifestar que:

1.- Por medio de presente escrito y fundado en mandato especial que se me ha conferido ejerzo la acción Administrativa de Reparación Directa en nombre del prenotado Sr. Franco Rojas, misma que acudo en oportunidad por fuera del término legal de caducidad de la misma.

2.- Al efecto presento ante su Despacho DEMANDA EN FORMA previo el agotamiento de la audiencia preliminar de CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL que procede de conformidad con lo prescrito en la ley 23 de 1991, arts. 59 y ss., y demás normas complementarias en especial los decretos 171 y 173 de 1993 y Ley 446 de 1998, habiendo agotado el requisito de procedibilidad requerido y en pro del ejercicio de la ACCION ADMINISTRATIVA DE REPARACION DIRECTA, cuyo Objetivo es el siguiente:

Se ha de establecer y consecencialmente reconocer la existencia de una causa probable de los perjuicios irrogados a mi mandante por el daño directo e indirecto que le fuera causado, así como los de orden moral que se han de acreditar por nuestra parte como que le fueron ocasionados con la falla en servicio de la administración de justicia; con sujeción al trámite de un largo y tedioso proceso penal que dirimió en mi favor el JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO de BUGA – VALLE – mediante la Sentencia Absolutoria en juicio oral y público, de fecha 9 De Junio del 2014, dentro de la Radicación No. 761116000165-200700422 - por la conducta presunta de Actos Sexuales con menor de edad. Misma que quedó ejecutoriada en primera instancia,

3.- Que se habiéndose agotado la diligencia preliminar de conciliación en derecho con la previa citación y audiencia de los sujetos procesales que en el futuro



mediato son los contendientes o accionados, ahora se los promulga como parte plural demandada con quienes será integrado el contradictorio, como son:

1.- LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - que está representada legalmente por la Dirección Nacional de la Judicatura o por la ejecutiva que haga sus veces.

2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; que está representada legalmente por la Dirección Nacional de la Judicatura o por la ejecutiva que haga sus veces.

I.- LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

1. **PARTE ACTORA.** Está compuesta por:

I.- AFFECTADO.- Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle.

2. **PARTE DEMANDADA.**

Lo son las Siguietes entidades:

2.1. La NACIÓN - RAMA JUDICIAL, representada legalmente por el Dr. Diógenes Villa Delgado en su condición de Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces al momento de la notificación del auto de procedibilidad, funcionario con sede en Bogotá D.C.

2.2. La NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por el Actual Fiscal General de la Nación Dr. Eduardo Montealegre Lynett o por quien haga sus veces al momento de la notificación del auto de procedibilidad, funcionario con sede en Bogotá.

II.- PRETENSIONES

PRIMERA Que la Nación - Rama Judicial y la Nación - Fiscalía General de la Nación, respondan patrimonialmente por todos los perjuicios ocasionados a cada uno de los convocantes y partes afectadas directa y colateralmente; como consecuencia de la de declaratoria de Absolución de toda responsabilidad penal – mediando sentencia en juicio oral y público, emitida en mi favor el JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO de BUGA – VALLE – mediante la Sentencia Absolutoria en juicio oral y público, de fecha 9 De Junio del 2014, dentro de la Radicación No. 761116000165-200700422 - por la conducta presunta de Actos Sexuales con menor de edad. Misma que quedó ejecutoriada en primera instancia,

Con la cual se obtuvo resolución judicial favorable de su juzgamiento.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, las instituciones convocadas paguen a título de indemnización las siguientes sumas de dinero:



1. PERJUICIOS MORALES.

Conforme a pretérito pronunciamiento del H. Consejo de Estado¹ la valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, atendiendo los principios de *Reparación Integral y Equidad* que señala el artículo 1 ó de la Ley 446 de 1998, y por lo cual se tasará así:

- PARA EL DIRECTAMENTE AFECTADOS DIRECTO, Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, Doscientos (200) salarios mínimos legales vigentes al momento del acuerdo conciliatorio.

2.- POR PERJUICIOS MATERIALES:

LUCRO CESANTE:

2.1. SALARIOS INDEXADOS.~ LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberá reconocerle al señor DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, o a quien sus derechos representen al momento del fallo, las cantidades que por concepto de perjuicios materiales (*daño emergente y lucro cesante*), se prueben dentro del presente proceso, los cuales se liquidarán en la % proporción que ha determinado la jurisprudencia, correspondiente a la suma que tuvieron que sufragar y dejaron de producir en razón al abuso en el ejercicio de funciones y las vías de hecho ejercidas por los funcionarios de la parte convocada.

En igual forma, serán reconocidos en la estimación de los perjuicios las mesadas correspondientes a primas, cesantías, vacaciones o por lo menos el aumento del 25% que por este concepto ha ordenado el Honorable Consejo de Estado, entre otras sentencias, la emitida el día 07 de diciembre de 1989, actores: Teresa de Jesús Correa y Otros, expediente 5591, Consejero Ponente Dr. Julio Cesar Uribe Acosta.

Como salario base se tendrá en cuenta la suma que devengaba el señor Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, en el momento del insuceso (del día 6 del mes de mayo del año 2007) – como comerciante independiente, como técnico en reparaciones de lavadoras y neveras en su local comercial de la carrera 6 No. 14 – 38 – siendo su ingreso mensual el que legalmente se ostentaba para dicha época y durante todo el curso procesal que lo mantuvo ajeno a sus actividades, siendo para la fecha de esta petición el que se ha establecido por el gobierno, hasta por la suma de Seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos Mcte (\$ 644.000,00) y

Así se aplicará la fórmula:

$$VP = S \frac{\text{índice Final}}{\text{índice Inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:

VP	Valor Presente
S	Suma que se busca actualizar



Índice final
Regulador.

índice de Precios al Consumidora la fecha del incidente

Índice Inicial índice de Precios al Consumidor a la fecha de causación del perjuicio.

La indemnización comprenderá dos períodos:

a. Vencido o consolidado, que se establezca aplicando la fórmula:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

La Renta mensual actualizada según la primera fórmula,

i interés puro o técnico del ó % mensual o 0.4867 mensual

n Período (número de meses) que comprende la indemnización ,que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto.

b. Futuro o anticipado, que se halla mediante la fórmula:

$$S = Ra (1+i)^n$$

2.2. COSTOS Y GASTOS DE LA DEFENSA PENAL.~ Que LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, paguen a favor del Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, (Afectado), la suma de ocho millones de pesos moneda corriente (\$ 8.000.000.00) M/Cte., por concepto de los PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de Daño Emergente, para cada uno de ellos; dineros estos que le correspondió cancelar al Abogado Penalista por concepto de honorarios profesionales con ocasión de la defensa técnica ejercida dentro del proceso penal.

3.- DAÑO A LA VIDA DE RELACION o ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA².

Recordemos que este perjuicio se consideró inicialmente como la pérdida de la posibilidad de realización de actividades lúdicas, que como consecuencia del daño sufrido se tornaban en difíciles o imposibles de ejecutar (perjuicio de agrado) y posteriormente se extendió a todos los casos de privación o alteración de la realización de cualquier actividad, no necesariamente de carácter placentero, suprimiéndole la calificación de fisiológico para adoptar la más comprensiva de daño a la vida de relación y aceptándose en todos los casos de detrimento a un bien jurídicamente tutelado

Así pues, encontramos que la vinculación del señor Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, (Afectado) y haber obtenido resolución de su caso, con sentencia absolutoria, les dejó mancillado su buen nombre dentro de los ámbitos laborales en los que se desenvolvió por mucho tiempo, evidenciando serios traumatismos por la estigmatización social a la que ha sido sometido al no haber encontrado decisión judicial, que se reflejaron en sus relaciones interpersonales, como así se comprobará.



La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente:

3.1. PARA EL DIRECTAMENTE AFECTADOS DIRECTOS, cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del acuerdo conciliatorio.

Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle,

TERCERO. Que el valor de la indemnización se liquide con el ajuste previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

III.- HECHOS.

PRIMERO: El Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, no es hombre casado pero tenía una relación afectiva estable con la persona de SANDRA MILENA ALZATE, la madre de la niña VALENTINA KITIAN, a la que se la identifica en el contexto del proceso penal como la presunta víctima, que lo llevó a limitarse en su actividad y desempeño normal.

SEGUNDO: Este grupo familiar se han destacado por el respeto y la colaboración de toda índole, permaneciendo siempre unidos pese a las dificultades económicas, en especial las que sobrevinieron a la medida de aseguramiento, imputación de cargos, acusación y juicio oral, del que fue objeto el afectado FRANCO ROJAS.

TERCERO: El señor Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, se ha hecho notable por la peculiaridad de sostener su núcleo familiar, ubicada en Buga (Valle del Cauca). Este escenario ha estrechado, más de lo corriente las relaciones familiares y personales.

Las cuales resultaron, también, perjudicadas en forma colateral por efecto del proceso penal referenciado contra su padre de crianza, que ha terminado con fallo absolutorio.

CUARTO: El mismo Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, debió acudir al apoyo de sus padres: Sr. Hugo Emilio Franco y la señora Maria Diva Rojas, personas mayores de edad y vecinos de Buga, para la atención integral de sus necesidades habidas por la censura pública y social que conllevó que se lo detuviera preso para legalizar su posible conducta, resultando, también, perjudicados en forma colateral por efecto del proceso penal referenciado contra su hijo, que ha trasegado siete (7) largos años, y hubo terminado con fallo absolutorio.

QUINTO.- En la calenda que reporta el proceso penal que se refiere se hubo cuestionado la conducta sexual de mi agenciado con una de sus entenadas menores de edad, de entre tres de la misma madre con la cual compartía una relación sentimental.

Se reportaron datos tomados por personas que de alguna manera tuvieron acceso a esta niña y que tornaron la situación en siniestra para ella y para el compañero de



su madre, desde la iniciativa del padre de sangre de la menor y por agencia de la compañera de amores del padre de sangre que hubo pretendido siempre apartarla del seno materno y tenerla a su diestra.

SEXTO: De esta alerta conoce el ICBF de Tuluá y luego el centro zonal de Buga, que tomo determinaciones respecto de la menor y su custodia, así mismo la fiscalía tomo posturas de cara a la situación planteada y se escucha en interrogatorio de indiciado y luego se dispone su captura y presentación para legalización, imputación e imposición de medida de aseguramiento.

A este se le permite el ejercicio de sus derechos y gracias a la valiosa labor de su abogado se logra que se abstenga de imponer medida de aseguramiento por ser enormemente dudosa la actividad y medios de prueba que se presenta para el momento, quedando demeritado con otros presentados por el defensor se lo ha dejado libre y bajo obligaciones específicas que lo atan con la investigación y juicio. Así es que este pasa a trasegar por espacio de siete (7) años atado a un trámite tortuoso y lento que impuso la fiscalía general de la nación para adentrarse en el juicio y su deposición probatoria que pasa por la vigencia y conocimiento de dos jueces penales del circuito.

SEPTIMO: En el PROCESO penal se vislumbra la limitada capacidad de prueba de parte del ente acusador y pese a ello elige la actividad lenta y no acude a los mecanismos legales para precluir la tramitación o juicio, por el contrario, la fiscal sexta seccional de Buga, insiste en mantener la actividad y llevar al acusado a mantener su zozobra y permanente afectación moral y mental que lo redujo en su capacidad laboral y productiva a la mínima expresión, refugiándose en una congregación cristiana a la cual pertenecía su compañera permanente y sus hijas.

OCTAVO: El contingente de la administración de justicia que se movilizó hacia el propósito inocuo de la FISCALIA no tiene antecedente, y menos del permanente estado de actividad sobre una causa que avizoraba fracaso para el ente acusador y sin embargo lo sostuvo por su propia iniciativa.

8.1. El proceso duró por espacio de 7 años calendario no siendo la evidencia diferente a la que fuera presentada desde la primera diligencia preprocesal o de imputación de cargos, en la cual se apreció y demeritó su valor por parte del juez de garantías, como insuficiente y dudosa para imponer, siquiera, una medida de aseguramiento diversa a la intramural, pero, no se la cambió, ni modificó o acrecentó en manera alguna y así se la presenta en el juicio oral, con los resultados negativos para el ente acusador.

NOVENO: El juicio se desarrolla en su integridad terminándolo con LA SENTENCIA referenciada ~ Sentencia de Fecha 9 De Junio del 2014 ABSOLUTORIA DE RESPONSABILIDAD ~ en cuanto respecta a los hechos por los cuales fuera acusado.

Emitida por el JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO de BUGA – VALLE
REFERENCIA: Juicio oral. De Radicación: No. 761116000165-200700422
Nombre del Imputado: DIEGO FERNANDO FRANCO R.

9.1. Esta sentencia quedó debidamente ejecutoriada para la misma fecha por cuanto contra ella no se interpuso recurso alguno por parte de la Fiscalía General de la Nación ni por parte del Ministerio Público.



9.2. La conducta pasiva de la fiscalía frente a la no interposición de recursos contra el fallo de primera instancia indica que le era familiar y conocido como viable y acertado el fallo de absolución y no el que venía solicitando en contra de mi procurado.

DECIMO.- Hasta la fecha de esta solicitud, no ha sido resarcido al afectado los daños morales, ni materiales y el daño a la vida de relación de la destitución del ejercicio de la calidad de ciudadano y hombre de bien, ni por su detención y anulación laboral por espacio de 7 siete años.

10.1. Este hombre fue señalado y públicamente afrentado como peligroso para la sociedad y frente a este particular se le limitó su espacio social con la consecuencia negativa de poderse vincular como contratista ante cualquiera de las empresas a las que ofrecía sus servicios como técnico en refrigeración y técnico en lavadora, limitándole a lo que pudiera realizar en el taller de su hermano, como ayudante de este.

No pudo superarse ni mejorar su situación laboral, familiar y laboral durante los 76 largos años que duró esta actividad de censura y juicio penal injusto desde sus inicios.

10.2. El Estado Colombiano es convocado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le son imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, como se ha indicado se ha actuado por la fiscal a cargo a sabiendas de la grande limitación probatoria y de la indeleble situación de ausencia de responsabilidad.

10.3. En tales términos anteriormente expuestos el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

10.3.1. Error jurisdiccional cometido por la autoridad de la fiscalía General de la Nación investida de una facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso de investigación, hubo materializado a través de la promoción y obtención de una orden de captura y una providencia contraria a la ley como es la imputación de unos cargos respecto de los cuales no había prueba que indicara autoría de parte del acusado.

El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se logró que se declarara o se hicieran efectivos actos contrarios al derecho subjetivo, como la privación de la libertad personal, la sujeción a una imputación ilegal de cargos, la imposición bajo acto de formulación una acusación en el mismo sentido y con las falencias sustanciales conocidas desde siempre.

10.3.2. A ello le precede el Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la dilación de los términos en forma inusitada contrariamente a los principios que orientan la ley 906 de 2004, por lo que mi representado hubo sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de esa función jurisdiccional, es por ello que tiene derecho a obtener la consiguiente reparación. Se produjo en las actuaciones judiciales que fueron necesarias



para adelantar el proceso y para la ejecución de las providencias judiciales que se lograron preprocesalmente.³

La sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 22 de noviembre de 2001, Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164), explicó Sobre la diferencia entre el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

UNDECIMO: Se elevó ante el Señor PROCURADURIA REGIONALDELEGADA ANTE EL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA, la SOLICITUD DE CONCILIACION PREVIA EN DERECHO de conformidad con la Ley 446 de 1998 - ACCIONADO 1.- CONVOCADO.- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO – siendo el ACCIONADO 2.- CONVOCADO.- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – y la FISCALIA GENERAL DE LA NACION –

DUODECIMO.- Estos convocados no presentaron ánimo conciliatorio frente a los hechos y pretensiones elevados al conocimiento del Procurador. De tal actividad se elevó el acta correspondiente para los fines de acreditación pertinentes por parte del PROCURADOR 60 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Dr. EDUARDO SILVA OROZCO

IV. ~ FUNDAMENTOS JURIDICOS

Constitución Política de 1991, artículos 2, 5, 6, 11 y 90.

Artículo 2 Inc. 2 C.N: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado"

Artículo 90 Inc. 1 C.N: "El Estado responderá patrimonialmente por los danos antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas"

Decreto 01 de 1984- Código Contencioso Administrativo-, artículo 86. Ley 270 de 1996. Ley 1285 de 2009. Decreto 1 716 de 2009. Ley 599 de 2000. Ley 906 de 2004.

La ley 906 de 2004 regula los términos para esta tramitación y ello se ubica en el art 294 y 175 de dicho ordenamiento adjetivo. De cara a lo antes mencionado, era de aquellas que de conformidad con el Art. 294 del C.P.P., debía de resolverse por el delegado fiscal antes de la fijación de la acusación, ó en dado caso, entre el interregno temporal corrido desde dicha fecha de la imputación de cargos y la formulación de la acusación.

Ley 270 de 1996 – estatutaria de la Administración de justicia. En tales términos anteriormente expuestos el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la

³ Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el 10 de mayo de 2001, exp. 12719.



administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Error jurisdiccional cometido por la autoridad de la fiscalía General de la Nación investida de una facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso de investigación, hubo materializado a través de la promoción y obtención de una orden de captura y una providencia contraria a la ley como es la imputación de unos cargos respecto de los cuales no había prueba que indicara autoría de parte del acusado.

El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se logró que se declarara o se hicieran efectivos actos contrarios al derecho subjetivo, como la privación de la libertad personal, la sujeción a una imputación ilegal de cargos, la imposición bajo acto de formulación una acusación en el mismo sentido y con las falencias sustanciales conocidas desde siempre.

A ello le precede el Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la dilación de los términos en forma inusitada contrariamente a los principios que orientan la ley 906 de 2004, por lo que mi representado hubo sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de esa función jurisdiccional, es por ello que tiene derecho a obtener la consiguiente reparación. Se produjo en las actuaciones judiciales que fueron necesarias para adelantar el proceso y para la ejecución de las providencias judiciales que se lograron preprocesalmente.⁴

La sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 22 de noviembre de 2001, Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164), explicó **Sobre la diferencia entre el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.**

V. - CONCEPTO DE LA VIOLACION.

El artículo 69 de la ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA- Si existió retardo injustificado de la Rama Judicial/ **RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-** se evidencia un daño antijurídico

Observa este censor que existió actuación tardía injustificada por parte del Fiscal 6 seccional de Buga, como lo confirma el sentido del fallo del Juzgado Segundo penal del Circuito de Buga, en las actuaciones surtidas en el proceso de investigación y para cuando se erige la Preparatoria de Juicio, incluso en el mismo devenir de las actividad probatoria del delegado fiscal en instancia de Juicio oral, aun así persistió en seguirle tramitando para ante ese Despacho de conocimiento sin instar la

⁴ Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el 10 de mayo de 2001, exp. 12719.



sentencia preclusiva o la solicitud de preclusión que cabe en esta etapa al mismo delegado de la fiscalía.

En consecuencia se evidencia un daño antijurídico atribuible a la Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, pues se configura la falla del servicio alegada por la parte demandante, ya que de acuerdo al material probatorio aportado existió retardo injustificado en las actuaciones, y se prefirió que permaneciera el ciudadano proscrito y limitado en su devenir social y laboral.

No obstante, el daño referido decimos que es totalmente imputable a la entidad demandada, ya que evidencian que el supuesto retardo alegado fue consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, en la iniciativa de la delegada de la fiscalía.

Así pues, con fundamento en los argumentos expuestos a lo largo del acápite de los hechos es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a la parte demandada (Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación), dado que al demostrarse el daño que se aduce haber sufrido, la actora, obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá ser de condena.

- Conforme a la valoración en su conjunto de las pruebas recepcionadas dentro del plenario penal, a la luz de las reglas de la sana crítica, se encuentra que se configura en el sub-lite, la falla en el servicio alegado por nuestra parte, habida cuenta que existe una actuación deficiente del delegado fiscal, como, un retardo injustificado en la adopción de las decisiones que le correspondían previamente a la instancia de Juicio que finalmente se reconoce existentes con tal antelación establecidas del pronunciamiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga.
- Si bien la oposición por parte de la defensa técnica a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento inquirida por la fiscalía en el desarrollo de las preliminares de legalización de captura, imputación de cargos y de imposición de medida de aseguramiento intramural se hubo sustanciado en forma elocuente y evidente ante el juez de control de garantías de Buga, se hizo con la debida oportunidad y anterioridad a la fecha señalada para la diligencia de acusación, llegada la cual no se varió en nada lo planteado y menos los medios de prueba o conocimiento que le servía a dicho delegado fiscal para sostener la tesis de probabilidad de verdad. En ese sentido, la solicitud de la parte acusada, dentro del proceso penal, no podía ser la de preclusión, por cuanto para dicha oportunidad la fiscalía debía o formular acusación o solicitar la preclusión.
- La ley 906 de 2004 regula los términos para esta tramitación y ello se ubica en el art 294 y 175 de dicho ordenamiento adjetivo. De cara a lo antes mencionado, era de aquellas que de conformidad con el Art. 294 del C.P.P., debía de resolverse por el delegado fiscal antes de la fijación de la acusación, ó en dado caso, entre el interregno temporal corrido desde dicha fecha de la imputación de cargos y la formulación de la acusación.
- De la revisión de la **Duración de la actuación de cara al Artículo 294. Vencimiento del término.** Modificado por el art. 55, Ley 1453 de 2011.



Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.

En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento.

El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente.

NOTA: Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-806 de 2008.

- **El Artículo 175. Duración de los procedimientos.** Modificado por el art. 49, Ley 1453 de 2011, Modificado por el art. 35, Ley 1474 de 2011. **Sentencia C-893/12** - Declarar **EXEQUIBLE**, por los cargos propuestos y analizados, el parágrafo único del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, modificadorio del artículo 175 de la Ley 906 de 2004. (La Corte Constitucional se declaro INHIBIDA para pronunciarse de fondo, por Ineptitud Sustantiva de Demanda, mediante Sentencia de la misma Corporación C- 262 de 2011). El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.

La audiencia del juicio oral tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.

Sentencia C-893/12 - Declarar **EXEQUIBLE**, por los cargos propuestos y analizados, el parágrafo único del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, modificadorio del artículo 175 de la Ley 906 de 2004.

Respecto de la DURACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL-
Término máximo de la fiscalía para la formulación de la imputación o el archivo de la indagación

Respecto de los TERMINOS ESTABLECIDOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE LA INDAGACION PENAL-No desconocen los principios de dignidad humana e igualdad, ni los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, ni las funciones y atribuciones de la Fiscalía General de la Nación

El Parágrafo del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, en la medida en la que el accionante supone que el vencimiento del plazo para la fase de indagación



preliminar, da lugar al archivo automático de las diligencias, si no existen suficientes elementos de juicio para la formulación de imputación.

No obstante, los efectos jurídicos son otros: apremiar al fiscal a adelantar la indagación dentro de los límites cronológicos allí previstos, someterlo al deber de hacer una evaluación integral del caso una vez acaecido el término, y habilitarlo para el archivo, cuando razonablemente se puede concluir que, a partir de la evidencia disponible, no se puede establecer si los hechos indicados en la *noticia críminis* existieron o reúnen los elementos objetivos de algún tipo penal.

En ese contexto, concluye la Corte que la disposición controvertida, en la que se establece un plazo de dos, tres y cinco años a la fase de indagación preliminar, no vulnera los preceptos constitucionales alegados por el demandante, por las siguientes razones:

En primer lugar, el establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento penal no suprime las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello.

En segundo lugar, los términos de **dos, tres y cinco años** previstos en la disposición acusada, responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa.

- Realizando un orden cronológico de las actuaciones surtidas por el fiscal delegado antes e la iniciación del juicio oral y público, así como las que realizó ante el Juzgado Segundo penal del Circuito de Buga, con posterioridad a la formulación de la acusación se vislumbra una actuación tardía, deficiente o injustificada por parte del Despacho del fiscal.

Se Concluye que existe el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado por nuestra parte, ya que los términos para resolver las distintas etapas procesales, no fueron prudentes y acordes a todos los aspectos esperados y que dentro del proceso de marras debía asumir la Delegada de la Fiscalía, permaneciendo el acusado sub judice por espacio de 7 largos años y tras ellos y el juicio no se pudo quebrar la presunción de inocencia,

a.- **El Problema Jurídico que se plantea** Puede ser expresado en los siguientes términos: 1.- ¿Es administrativa y patrimonialmente responsable la Rama Judicial por supuestos errores cometidos por el fiscal 6 seccional de Buga para ante el desarrollo de las etapas de Formulación de acusación, Preparatoria y del juicio ante el Juzgado 2 Penal del Circuito de Buga en la tramitación del proceso penal de marras?

2.- ¿Existió retardo injustificado y lentitud en la justicia por parte del Fiscal 6 seccional de Buga y el Juzgado 2 Penal del Circuito de Buga a través de su



presidencia o fue dicho retardo consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia?

b. Marco Teórico.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia actora:

b.1. Responsabilidad extracontractual del Estado.

La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política.

Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos:

- “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración.
- b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano
- c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.
- d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...”.

Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos:

- a) Una actuación irregular del Estado
- b) El daño antijurídico
- c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración

b.2 Responsabilidad del Estado Juez.

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 90 la responsabilidad patrimonial del Estado. Dice su primer inciso:



“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.

La **LEY 270 DE 1996**⁵ (Marzo 7) -Diario Oficial No. 42.745, de 15 de marzo de 1996- preceptúa, en el CAPÍTULO VI. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.”

“ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

“ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.”

Sobre la diferencia entre el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 22 de noviembre de 2001, Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164), explicó:

“2. El error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

“El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.⁶

“La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

“...nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho

⁵ La Corte Constitucional, en **sentencia C-037/96** efectuó la Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”. Magistrado ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA. 5 de febrero de 1996.

⁶ Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el 10 de mayo de 2001, exp. 12719.



plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño -incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado -si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

“En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”⁷.

“Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (Art. 69 ley 270 de 1996).

De conformidad con las anteriores precisiones, el caso sub lite debe estudiarse en el marco del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a que se refiere el artículo 69 de la Ley 270 de 1996.

b.3. Diligencia del proceso penal según el art 294 y 175 del Código de Procedimiento Penal.

- De la revisión de la **Duración de la actuación de cara al Artículo 294. Vencimiento del término.** Modificado por el art. 55, Ley 1453 de 2011. Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.

En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento.

El vencimiento de los términos señalados será causal de mala conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria competente.

NOTA: Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-806 de 2008.

- **El Artículo 175. Duración de los procedimientos.** Modificado por el art. 49, Ley 1453 de 2011, Modificado por el art. 35, Ley 1474 de 2011. **Sentencia C-893/12** ~ Declarar **EXEQUIBLE**, por los cargos propuestos y analizados, el parágrafo único del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, modificadorio del

⁷ Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25.



artículo 175 de la Ley 906 de 2004. (La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para pronunciarse de fondo, por Ineptitud Sustantiva de Demanda, mediante Sentencia de la misma Corporación C- 262 de 2011). El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad, no podrá exceder de treinta (30) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.

La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.

La audiencia del juicio oral tendrá lugar dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.

Sentencia C-893/12 - Declarar **EXEQUIBLE**, por los cargos propuestos y analizados, el parágrafo único del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, modificadorio del artículo 175 de la Ley 906 de 2004.

Respecto de la DURACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL- Término máximo de la fiscalía para la formulación de la imputación o el archivo de la indagación

Respecto de los TERMINOS ESTABLECIDOS PARA FORMULAR IMPUTACION U ORDENAR MOTIVADAMENTE EL ARCHIVO DE LA INDAGACION PENAL-No desconocen los principios de dignidad humana e igualdad, ni los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, ni las funciones y atribuciones de la Fiscalía General de la Nación

El Parágrafo del Artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, en la medida en la que el accionante supone que el vencimiento del plazo para la fase de indagación preliminar, da lugar al archivo automático de las diligencias, si no existen suficientes elementos de juicio para la formulación de imputación.

No obstante, los efectos jurídicos son otros: apremiar al fiscal a adelantar la indagación dentro de los límites cronológicos allí previstos, someterlo al deber de hacer una evaluación integral del caso una vez acaecido el término, y habilitarlo para el archivo, cuando razonablemente se puede concluir que, a partir de la evidencia disponible, no se puede establecer si los hechos indicados en la *noticia críminis* existieron o reúnen los elementos objetivos de algún tipo penal.

En ese contexto, concluye la Corte que la disposición controvertida, en la que se establece un plazo de dos, tres y cinco años a la fase de indagación preliminar, no vulnera los preceptos constitucionales alegados por el demandante, por las siguientes razones:

En primer lugar, el establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento penal no suprime las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligentemente y eficazmente; tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos.



Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello.

En segundo lugar, los términos de **dos, tres y cinco años** previstos en la disposición acusada, responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa.

c.- Las Etapas agotadas y las Pruebas obrantes.

Obran los siguientes en el plenario:

Al tenor de las ACTAS JUDICALES DE REGISTRO DE LAS AUDIENCIAS AGOTADAS EN LA TRAMITACIÓN PENAL – INTEGRALMENTE, ASÍ.

I.- Las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.

II.- Acta de Audiencia de formulación de Acusación

III.- Acta de Audiencia Preparatoria de Juicio.

IV.- Actas de Audiencia de inicio del juicio – teoría del caso – y desarrollo de pruebas en juicio oral –

V.- Acta de Audiencia de alegatos de conclusión de las partes –

VI. Acta de Audiencia de Sentido del Fallo.

VII. Acta de Audiencia de Fallo Absolutorio y Ejecutoria formal y material.

C. En el Caso Concreto

1. El artículo 69 de la ley 270 de 1996 establece que cuando el daño no proviene de un error judicial o de la privación injusta de la libertad, el título de imputación jurídica radica en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Dentro de ese concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios (Jueces y fiscales) sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales.
2. El Juez de los Contencioso Administrativo ha de efectuar un análisis cronológico de las actuaciones surtidas por el Fiscal 6 seccional y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga, las cuales fueron indicadas en el acápite precedente.

“Entre la fecha de la captura y la fecha en que se abrió a juicio público y la fecha en que se profirió la sentencia mediante el cual se resolvió el fondo del



caso y se decretó la terminación del proceso y como consecuencia de ello, se ordenó la ejecutoria formal y material por cuanto no se recurrió dicho fallo. Todo lo cual transcurrió en un lapso de más de 7 años calendario.

De lo anterior observa este censor que existió actuación tardía injustificada por parte del fiscal 6 seccional y el Juzgado segundo penal del Circuito en las actuaciones surtidas en el proceso penal de radicación tramitado por ese Despacho Judicial.

3. Se evidencia un daño antijurídico atribuible a la Rama Judicial, pues se configura la falla del servicio alegada, ya que de acuerdo al material probatorio aportado existió ningún retardo injustificado en sus actuaciones.

4. No obstante, el daño referido decimos que es imputable a la demandada, ya que esta Delegada, igualmente que el Tribunal Contencioso, evidencian que el supuesto retardo alegado por la parte actora fue consecuencia del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

2.- Fundamento constitucional de la Responsabilidad Estatal.

El artículo 1 de nuestra Carta Política concibe el Estado Social de Derecho Como aquel de profundo respeto por la dignidad humana y la solidaridad de Las personas con una prevalencia del interés general sobre el particular; Norma que debe concordarse con el Artículo 2 en su inciso 2 al determinar Que " las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derecho y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de! Estado y de los particulares".

El artículo 90 de nuestra Constitución Política señala: "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas". La última parte de este inciso hace relación a la causalidad, y de ella depende el examen de la imputación o adjudicación del daño a las autoridades públicas.

Nuestra Constitución Política en el citado artículo 90 nos enseña que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que se ocasionen como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas. Así las cosas, como lo ha distinguido la jurisprudencia y la doctrina, a partir de este texto constitucional el deber resarcitorio o de reparación a cargo de! Estado emerge cuando se ha causado un daño antijurídico que le sea imputable.

Es así como, dentro de este nuevo universo constitucional, la responsabilidad no está únicamente ligada a! actuar negligente, culposo o doloso, es decir a criterios subjetivos, desplazándose a criterios objetivos, fundamentados en principios de justicia, equidad, solidaridad, etc., en donde la importancia gira alrededor de quien sufre el daño. Es así, como puede hallarse el Estado

Obligado a resarcir un perjuicio causado a pesar que su actividad o actuación esté dentro de los marcos de la licitud. Esta filosofía jurídica, argumentada desde hace varios años, se alimenta .con la esencia del artículo 90 de nuestra Constitución al disponer la responsabilidad estatal por los daños antijurídicos.



El daño antijurídico es fuente de responsabilidad estatal y a su vez la teoría de la responsabilidad objetiva adquiere fundamento constitucional, razón por la cual surge la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado como el punto de intersección a través del cual encuadra cualquier régimen de responsabilidad.

El concepto de daño antijurídico no ha sido definido en nuestra legislación, pero hace varios años la jurisprudencia colombiana ha venido formando la teoría de la Lesión resarcible fundamentada en el daño antijurídico, basados en la doctrina española, y es así como en distintos fallos emitidos por el Consejo de Estado se encuentra una concepción del daño antijurídico que lo consagra como el fundamento de todo deber y obligación de reparación.

De ahí, que el objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado es el restablecer el equilibrio económico roto cuando se lesiona un patrimonio particular por parte de la administración pública. Se ha pasado de la llamada antijuricidad subjetiva, que exigía el dolo, la culpa o falta del funcionario de la administración para generar la responsabilidad del Estado, a -la llamada antijuricidad objetiva, que tiene como fundamento el daño Ocasionado a la víctima, que pasa a ser el elemento más importante de la responsabilidad patrimonial estatal.

1. Régimen de responsabilidad aplicable al caso sub júdice.

De la responsabilidad en el desarrollo de la actividad de la Administración de Justicia.

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, dentro de su regulación al respecto de la Responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, en desarrollo del artículo 90 constitucional; indica varias hipótesis por las que el Estado debe responder patrimonialmente, la primera de ellas la denominó el error jurisdiccional, que definió como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a -través de una providencia contraria a la ley; el segundo por la privación injusta de la libertad, y un último derivado del defectuoso funcionamiento de la administración⁸ que implica que quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de la función jurisdiccional podrá replicar por la respectiva indemnización.

Al respecto del error jurisdiccional el doctrinante Jorge Pérez Villa en su obra "Responsabilidad Estatal y Acción de Repetición" expone:

" Lo primero que se debe tener claro, es que el error jurisdiccional, no es sólo el simple yerro, falla o falta de certeza del juez que hace la interpretación jurídico de lo decisión, lo cual es insuficiente, pues lo probanza del error jurisdiccional. Debe estar nutrida de un actor metafísico, subjetivo y arbitrario, violatorio del debido proceso como garantía constitucional y legal jurisdiccional.

También se debe tener en cuenta, que el afectado al interpuesto los recursos de ley, salvo en los supuestos de privación injusta la libertad, cuando ésta se dé conjuntamente una decisión judicial y que dicha



decisión en donde se sustancie el error, esté ejecutoriada."⁹

Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Por otro lado el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 expresa que el: "Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación."

Consagra esta norma la responsabilidad directa del Estado "por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia", modalidad que se diferencia del error judicial y de la injusta privación de la libertad, y que se configura cuando por acción o por omisión, se produce un daño antijurídico, pero sin que sea consecuencia de la interpretación o aplicación de una norma de derecho, pues de ser así, se opera un error judicial que se juzga al tenor del artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Justicia.

El H. Consejo de Estado, sobre la falla del servicio en el servicio judicial, como fuente de responsabilidad de la administración ha expuesto:

"(...) y para que la responsabilidad estatal resulte comprometida por error jurisdiccional, como yo lo había dicho la sala requiere que la providencia a la cual el mismo, se imputa contenga una decisión abiertamente ilegal. En sentencia de octubre de 1992 (Proceso No.7058; actor: Carmen Aminta Escobar Mejía, con ponencia del doctor Daniel SuárezHernández), la Sala dijo sobre el punto:

"Si bien el Consejo de Estado se ha demostrado renuente ha declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio judicial, considera la sala que tal posición jurisprudencial no puede ser tan inflexible ni volver la espalda a determinadas realidades de equidad y justicia en cuanto se trata de resarcir los perjuicios ocasionados con acciones u omisiones escandalosamente injurídicas y abiertamente ¡legales, ocurridas en la prestación de dicho servicio. Desde luego, no se trata, no se trata de reconocer responsabilidad administrativa a cargo del Estado como consecuencia de un fallo, sentencias definitivas y con efectos de cosa juzgada por la simple equivocación conceptual en que pueda incurrir el juzgador. Al contrario, se trata de que los administrados conozcan que ' cuando sus jueces incurran en eventuales conductas abiertamente Contrarias o derecho y generadoras 'de daños y perjuicios materiales y morales., junto con su personal responsabilidad, originan también en el propio Estado la obligación resarcitoria. Las situaciones desde luego, tiene que ser muy especiales, de aquellas en que por ser tan ostensible y manifiestamente errado el comportamiento del juez, con su proyección hacia los asociados, ocasionen perjuicios graves, como el fallecimiento de una persona de una persona y su significación patrimonial, económica y moral en parentela"

Ahora debemos precisar los aspectos que nos llevarán indefectiblemente a responsabilizar a las entidades públicas aludidas de los perjuicios originados a los



convocantes, pues como se demuestra con la documentación arrojada es atribuible a la falla en la actuación judicial, en quien concurren los elementos constitutivos del régimen de falta como generadora del deber resarcitorio a cargo del Estado.

Para ello resulta indispensable que tengamos en cuenta lo que jurisprudencialmente se ha destacado como los requisitos para la constitución de la falla administrativa:

"Cuando el Estado, en desarrollo de sus funciones incurre en la llamada "FALTA O FALLA DEL SERVICIO", o mejor aún falta o falla de la administración, frótese de simples actuaciones, omisiones hechos y operaciones administrativas, se hace responsable de los daños causados al administrado. Esta es la fuente común y frecuente de la responsabilidad estatal y se requiere:

- a) Una falta o fallas del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta o falla de que se trata, no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración;
- b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano;
- c) Un daño, que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc., con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc., y
- c) Una relación causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización..."

Vulneración del derecho a acceder a la administración de justicia.

Sentido material y formal

En el caso que nos ocupa resulta evidente la falla de las entidades convocadas, pues se está demostrando, como en algunas de las piezas del trámite, es manifiesta la tardanza del instructor judicial y posteriormente del administrador de justicia para impulsar las diligencias necesarias y tendientes a esclarecer el enjuiciamiento, como derecho que tiene el sindicado al ser sometido a una investigación.

No se trata en el sub -lite de imputar la responsabilidad del Estado' como consecuencia de una providencia contraria a derecho, lo que se discute es la irregular y deficiente actuación procedimental que imprimieron las dependencias instructoras y juzgadoras. En estos eventos la obligación resarcitoria de las instituciones públicas surge por el resultado de conductas abiertamente arbitrarias y vulneradoras de los principios mismos del estatuto procedimental penal, vr. gr. economía, celeridad entre otros, pues muy dicente resultan las conductas poco diligentes y emisivas de los fiscales sustanciadores del instructivo, vulnerando no sólo derechos constitucionales fundamentales sino principios propios de la actuación judicial penal como lo hemos mencionado, entre otros el previsto en el artículo 15 id., que hace referencia directa a la celeridad y eficiencia de toda actuación procesal



penal, al indicar que la misma, siempre se surtirá pronta y cumplidamente sin dilaciones injustificadas, y que los términos procesales son perentorios y de estricto cumplimiento.

Del estudio juicioso y detallado de foliatura encontramos que el fenómeno de la dilación desproporcionada del trámite procesal no obedeció a maniobras dilatorias, ni desleales de los sujetos procesales, simple y llanamente fue una consecuencia de la morosidad y negligencia de quienes como funcionarios judiciales en representación de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, dirigieron el proceso y las actuaciones dentro del sistema judicial, palmaria falla de dicho servicio público esencial, que busca resolver pacíficamente los conflictos sociales que afectan a los ciudadanos.

En la propia sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional al pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, calificó como parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el ***"derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos"***.

Expuso la Alta Colegiatura: “ 'Así, los postulados de una justicia pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de todos los asuntos que se someten a su conocimiento, armonizan con la, Constitución en cuanto se orientan a hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, al punto que dispone que los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales.

Las condiciones de celeridad, prontitud y eficacia de la administración de justicia, para todos los procesos que se sometan a su consideración, se fortalecen con la consagración, como causal de mala conducta, de la violación injustificada de los términos procesales, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar"

"El artículo 229 de la CP garantiza a toda persona el derecho de acceso a la administración de justicia. Este derecho tiene íntima relación con el derecho fundamental al debido proceso (CP, art. 29), hasta el punto que suele tratarse como perteneciente a este último. Conviene, sin embargo, distinguir la pretensión dirigida a poner en movimiento el aparato judicial, de las garantías que se aplican específicamente a la actuación judicial.

El derecho a acceder a la Administración de Justicia, denominado en otras latitudes derecho a la tutela judicial efectiva, tiene naturaleza prestacional, en cuanto que lo que se busca es que el Estado despliegue la actividad judicial, respondiendo, a través del proceso, a las pretensiones que se le formulan, las que deben resolverse con base en el sistema de fuentes establecido y de manera independiente, imparcial y en un término razonable, mediante una decisión de fondo motivada, salvo que concurran causales legítimas de inadmisión (CP, arts. 228, 229 y 230).

La Constitución marca nítidamente los tres momentos que están presentes normalmente en la relación persona-justicia y que resulta oportuno diferenciar: el acceso a la justicia; el proceso, como mecanismo obligado, que constituye el médium en el que ordenadamente se ofrece la respuesta del Estado y en el que se articula la actividad de las partes, y la sentencia, que pone fin al proceso.



El desarrollo de todo proceso dentro de un tiempo razonable corresponde a una exigencia que integra el objeto del derecho fundamental a «un proceso público sin dilaciones injustificadas») (CP, art. 29). La tutela judicial efectiva no es distinta de la justicia oportuna, dado que sólo ésta satisface los derechos, intereses y expectativas legítimas de quienes acuden a la jurisdicción. El eficaz funcionamiento de la administración de justicia (CP, arts., 228 y 257-3), representa un requerimiento orgánico que la Constitución impone al aparato del Estado a cargo del cual se encuentra el ejercicio activo de la jurisdicción.

La importancia de la consagración del derecho fundamental analizado consiste en que la nota funcional que debe caracterizar la prestación del servicio de la justicia —objeto del derecho al debido proceso—, se convierte en derecho público subjetivo que puede enderezarse contra el Estado, dentro del proceso (CP, art 29) o por fuera de él en otro distinto en el que se pueden reclamar los perjuicios derivados de la injustificada tardanza (CP, art 90). En este orden de ideas, así como la Carta obliga al juez a observar con diligencia los términos procesales, so pena de que su incumplimiento sea sancionado (CP, art. 228), desde la perspectiva del sujeto se predica el derecho fundamental a que el proceso y los actos que lo conforman se desenvuelvan razonablemente dentro de los términos previstos, pues las únicas dilaciones que tolera la Constitución son las dilaciones justificadas”¹⁰.

De contenido múltiple o complejo, cuya efectividad comprende, entre otros, el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas.”¹¹.

En este orden de ideas, es importante señalar que la decisión de fondo —la cual se postula como regla general susceptible de sufrir excepciones en determinados casos— constituye la respuesta típica del Estado a la petición de justicia que se garantiza en el artículo 229 de la CP, dado que de no presuponerse la tutela judicial efectiva perdería todo sentido y utilidad prácticas, como quiera que el acceso no es un fin en sí mismo, sino que apunta a obtener una decisión en derecho. *De otro lado, si la determinación aludida no se fundamenta, el derecho a los recursos, la presunción de inocencia, el debido proceso, la obligada sujeción de los jueces al imperio de la ley, entre otros principios superiores, quedaría automáticamente privada de efectividad.*

El acceso a la justicia no debe entenderse en un sentido meramente formal, en cuya virtud pueda acudir a los jueces, sino que radica sobre todo en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera resolución -ya por la vía activa, ora por pasiva- la obtenga oportunamente.

Conclusión:

Concluimos entonces, que el deber resarcitorio surge por el agravio que se causa de forma antijurídica, pues al declararse la prescripción de la acción penal, se cohibió la posibilidad al convocante de su derecho a probar su no responsabilidad en la conducta que le imputaban y a obtener una decisión de fondo que resolviera definitivamente su situación jurídica.



VI.- DE LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA A EJERCER

Esta controversia de carácter particular en vía judicial correspondería a una acción de Reparación Directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto 01 de 1984.

VII.- AGOTAMIENTO OPORTUNO DE LA CONVOCATORIA A CONCILIACION

Fue agotado y así consta en las actas adjuntas. Con fundamento en el artículo 136 numeral 8 del C.C.A. modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, nos encontramos dentro del término de ley para instaurar la convocatoria a Conciliación, de que trata el artículo 13 de La Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 19-98 y el capítulo V de la Ley 640 de 2001.

VIII.- MANIFESTACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

De conformidad con el literal d del Decreto 251.1 de 1998, como el literal del artículo 6 del Decreto 1716 de 2009, nos permitimos manifestar bajo la gravedad de juramento que no hemos presentado demanda o solicitud de conciliación con base en los mismos hechos.

IX.- ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

Atendiendo lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 1395 de 2010, el cual modificó el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, que ahora indica que la cuantía se determinará, tratándose de varias pretensiones; por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda., nos permitimos estimar

Razonadamente la cuantía en la suma de un ciento noventa millones de pesos (\$190.000.000.00) m/cte, aproximadamente equivalente a trescientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (300).

La anterior cuantía deberá tomarse en consideración para todos los efectos legales.

X.- RELACION DE MEDIOS DE PRUEBA

1.- DOCUMENTALES:

Solicito al señor Procurador Judicial Delegado ante lo Contencioso Administrativo se tengan como medios de prueba los siguientes documentos aportados con la solicitud de convocatoria:

- 1.** Poder debidamente otorgado por El convocante y actor.



2. Fotocopia de auténtica del registro civil de nacimiento del afectado.
3. Fotocopia autentica de las actas del proceso penal desarrollado por el juez penal del circuito de Buga en contra del afectado. JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO REFERENCIA: Radicación: No. 761116000165-200700422 – contra el Imputado DIEGO FERNANDO FRANCO R.
4. Fotocopia autentica de la sentencia de primera instancia **sentencia de Fecha 9 De Junio del 2014** ~ ABSOLUTORIA DE RESPONSABILIDAD ~ expedido por el Juzgado Penal del Circuito de Buga dentro de la Radicación precisada en los hechos.
5. Fotocopia del acta de audiencia de fallo en que consta la emisión de la providencia de sentencia y la constancia de que quedó debidamente ejecutoriada para la misma ~ por cuanto contra ella no se interpuso recurso alguno por parte de la Fiscalía General de la Nación ni por parte del Ministerio Público.
6. Constancia autentica por el Doctor JULIO CESAR PEREZ CHICUE identificado con C.C. 14.887.646 de Buga y T.P. 60.880 del Consejo Superior de la Judicatura, donde especifica el pago de honorarios por parte del señor DIEGO FRANCO ROJAS por la suma de Ocho millones (\$ 8.000.000) de pesos, dentro del proceso penal referido.
7. Actas y constancias emitidas por el PROCURADOR 60 DELEGADO ANTE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS. De conformidad con el literal d del Decreto 251.1 de 1998, como el literal del artículo 6 del Decreto 1716 de 2009.

XI. - NOTIFICACIONES

A los suscritos apoderados en el Edificio LA CASONA ubicado en la Carrera 15 No. 6 - 33 Oficina 8 y 9 – Buga – Valle del Cauca, teléfonos 3128767868 y 3184347229 - e-nmail – perezchicueabogado@hotmail.com.

EL Actor y mandante por intermedio del suscrito apoderado.

Las entidades convocadas: La Nación ~ Rama Judicial, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca.

La entidad convocada Nación ~ Fiscalía General de la Nación, por intermedio del Fiscal General de la Nación, funcionario con sede en Bogotá, o a través del Director Seccional de Fiscalía del Departamento del Cauca.

Atentamente,

JULIO CESARE PÉREZ CHICUE
C.C. 14.887 646 – TP.60880 CSJ
Guadalajara de Buga, Julio 09 de 2015



Señor
JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - REPARTO
BUGA – VALLE DEL CAUCA.
E.....S.....D

ASUNTO	Acción de Reparación directa- ACCIONADO 1.- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO. ACCIONADO 2.- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – FISCALIA GENERAL DE LA NACION -
ACTOR	DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS - C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle,

DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, respetuosamente me dirijo al HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVO DEL VALLE destacado ante el circulo judicial de Guadalajara de Buga, para manifestar que:

1.- Por medio de presente escrito otorgo mandato especial al Dr. JULIO CESAR PEREZ CHICUE, abogado en ejercicio identificado con la C.C. 14.887.646 DE Buga y TP 60.880 del CSJ, para que en mi nombre y representación ejerza la acción Administrativa de Reparación Directa en mi nombre en oportunidad por fuera del término legal de caducidad de la misma y ante su Despacho promueva DEMANDA EN FORMA previo el agotamiento de la audiencia preliminar de CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL que procede de conformidad con lo prescrito en la ley 23 de 1991, arts. 59 y ss., y demás normas complementarias en especial los decretos 171 y 173 de 1993 y Ley 446 de 1998, habiéndolo agotado como requisito de procedibilidad en pro del ejercicio de la ACCION ADMINISTRATIVA DE REPARACION DIRECTA, que procede habiéndose agotado la diligencia preliminar de conciliación en derecho con la previa citación y audiencia de los sujetos procesales que son los contendientes o accionados, ahora se los promulga como parte plural demandada con quienes será integrado el contradictorio, como son:

La NACIÓN - RAMA JUDICIAL, representada legalmente por el Dr. Diógenes Villa Delgado en su condición de Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces al momento de la notificación del auto de procedibilidad, funcionario con sede en Bogotá D.C.

La NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por el Actual Fiscal General de la Nación Dr. Eduardo Montealegre Lynett o por quien haga sus veces al momento de la notificación del auto de procedibilidad, funcionario con sede en Bogotá.



Cuyo Objetivo es el siguiente:

Se ha de establecer y consecencialmente reconocer la existencia de una causa probable de los perjuicios irrogados a mi mandante por el daño directo e indirecto que le fuera causado, así como los de orden moral que se han de acreditar por nuestra parte como que le fueron ocasionados con la falla en servicio de la administración de justicia; con sujeción al trámite de un largo y tedioso proceso penal que dirimió en mi favor el JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO de BUGA – VALLE – mediante la Sentencia Absolutoria en juicio oral y público, de fecha 9 De Junio del 2014, dentro de la Radicación No. 761116000165-200700422 - por la conducta presunta de Actos Sexuales con menor de edad. Misma que quedó ejecutoriada en primera instancia.

Para que se condene a los demandados en iguales o similares condiciones a las siguientes:

PRIMERA Que la Nación - Rama Judicial y la Nación - Fiscalía General de la Nación, respondan patrimonialmente por todos los perjuicios ocasionados a cada uno de los convocantes y partes afectadas directa y colateralmente; como consecuencia de la de declaratoria de Absolución de toda responsabilidad penal – mediando sentencia en juicio oral y público, emitida en mi favor el JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO de BUGA – VALLE – mediante la Sentencia Absolutoria en juicio oral y público, de fecha 9 De Junio del 2014, dentro de la Radicación No. 761116000165-200700422 - por la conducta presunta de Actos Sexuales con menor de edad. Misma que quedó ejecutoriada en primera instancia,

Con la cual se obtuvo resolución judicial favorable de su juzgamiento.

SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, las instituciones convocadas paguen a título de indemnización las siguientes sumas de dinero:

PERJUICIOS MORALES.

Conforme a pretérito pronunciamiento del H. Consejo de Estado¹² la valoración del perjuicio moral se tendrá en salarios mínimos legales mensuales, atendiendo los principios de *Reparación Integral y Equidad* que señala el artículo 1 ó de la Ley 446 de 1998, y por lo cual se tasaré así:

- PARA EL DIRECTAMENTE AFECTADOS DIRECTO, Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, Doscientos (200) salarios mínimos mensuales



legales vigentes al momento del acuerdo conciliatorio.

POR PERJUICIOS MATERIALES:

LUCRO CESANTE:

SALARIOS INDEXADOS.~ LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, deberá reconocerle al señor DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, o a quien sus derechos representen al momento del fallo, las cantidades que por concepto de perjuicios materiales (*daño emergente y lucro cesante*), se prueben dentro del presente proceso, los cuales se liquidarán en la % proporción que ha determinado la jurisprudencia, correspondiente a la suma que tuvieron que sufragar y dejaron de producir en razón al abuso en el ejercicio de funciones y las vías de hecho ejercidas por los funcionarios de la parte convocada.

En igual forma, serán reconocidos en la estimación de los perjuicios las mesadas correspondientes a primas, cesantías, vacaciones o por lo menos el aumento del 25% que por este concepto ha ordenado el Honorable Consejo de Estado, entre otras sentencias, la emitida el día 07 de diciembre de 1989, actores: Teresa de Jesús Correa y Otros, expediente 5591, Consejero Ponente Dr. Julio Cesar Uribe Acosta.

Como salario base se tendrá en cuenta la suma que devengaba el señor Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, en el momento del insuceso (del día 6 del mes de mayo del año 2007) – como comerciante independiente, como técnico en reparaciones de lavadoras y neveras en su local comercial de la carrera 6 No. 14 – 38 – siendo su ingreso mensual el que legalmente se ostentaba para dicha época y durante todo el curso procesal que lo mantuvo ajeno a sus actividades, siendo para la fecha de esta petición el que se ha establecido por el gobierno, hasta por la suma de Seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos Mcte (\$ 644.000,00) y

Así se aplicará la fórmula:

$$VP = S \frac{\text{índice Final}}{\text{índice Inicial}}$$

Donde los factores equivalen a:

VP	Valor Presente
S	Suma que se busca actualizar
Índice final Regulador.	índice de Precios al Consumidora la fecha del incidente

Índice Inicial índice de Precios al Consumidor a la fecha de causación del perjuicio.



La indemnización comprenderá dos períodos:

c. Vencido o consolidado, que se establezca aplicando la fórmula:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

La Renta mensual actualizada según la primera fórmula,

i interés puro o técnico del ó % mensual o 0.4867 mensual

n Período (número de meses) que comprende la indemnización ,que va desde la fecha de ocurrencia del hecho, hasta aquella probable de ejecutoria del auto.

d. Futuro o anticipado, que se halla mediante la fórmula:

$$S = Ra (1+i)^n$$

COSTOS Y GASTOS DE LA DEFENSA PENAL.- Que LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, paguen a favor del Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle, (Afectado), la suma de ocho millones de pesos moneda corriente (\$ 8.000.000.00) M/Cte., por concepto de los PERJUICIOS MATERIALES en la modalidad de Daño Emergente, para cada uno de ellos; dineros estos que le correspondió cancelar al Abogado Penalista por concepto de honorarios profesionales con ocasión de la defensa técnica ejercida dentro del proceso penal.

DAÑO A LA VIDA DE RELACION O ALTERACION DE LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA¹³.

Recordemos que este perjuicio se consideró inicialmente como la pérdida de la posibilidad de realización de actividades lúdicas, que como consecuencia del daño sufrido se tornaban en difíciles o imposibles de ejecutar (perjuicio de agrado) y posteriormente se extendió a todos los casos de privación o alteración de la realización de cualquier actividad, no necesariamente de carácter placentero, suprimiéndole la calificación de fisiológico para adoptar la más comprensiva de daño a la vida de relación y aceptándose en todos los casos de detrimento a un bien jurídicamente tutelado

Así pues, que mi vinculación como procesado y haber obtenido resolución de mi caso, con sentencia absolutoria, me dejó mancillado su buen nombre dentro de los ámbitos laborales en los que me he desenvuelto por mucho tiempo, evidenciando serios traumatismos por la estigmatización social a la que ha sido sometido al no haber encontrado decisión judicial, que se reflejaron en sus relaciones interpersonales, como así se comprobará.

La tasación del presente perjuicio, se estima aproximadamente:

PARA EL DIRECTAMENTE AFECTADOS DIRECTOS, cien (100) salarios



Pérez Chicué & Abogados

30

mínimos mensuales legales vigentes al momento del acuerdo conciliatorio.

Sr. DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS – mayor de edad, identificado con la C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle,

TERCERO. Que el valor de la indemnización se liquide con el ajuste previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Mi apoderado queda facultado de conformidad con lo indicado en el art 70 del C.P.C y 77 del CG.P. para recibir, transigir, sustituir, reasumir, nominar suplente, conciliar, suscribir acuerdos y compromisos de pago, etc. En pro de la salvaguarda de mis intereses.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO FRANCO ROJAS
C.C. No 14.891.786 expedida en Buga – Valle.

Atentamente,

JULIO CESARE PÉREZ CHICUE
C.C. 14.887 646 – TP.60880 CSJ